



Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

CPE 1884/2017/TO1/5

///nos Aires, 23 de agosto de 2023.-

VISTAS las solicitudes de suspensión del juicio a prueba formuladas a favor del imputado **Emilio Walter BIANCHETTI** (titular del DNI N° 24.365.143, argentino, nacido en esta ciudad el 4 de febrero de 1975 y con domicilio real en la calle Gral. César Díaz 1748 de esta ciudad) y de la firma **“JANITOR SRL”** (CUIT 30-70976314-4 y con domicilio fiscal en Gral. César Díaz 2234 de esta ciudad), en la causa **CPE 1884/2017/TO1 (int. 3145)** caratulada **“JANITOR SRL y otro s/ inf. Ley 24.769”** y,

CONSIDERANDO:

I.- Que se celebró con fecha 10 de agosto ppdo. la audiencia del art. 293 del CPP, oportunidad en que fueron escuchadas las partes. La damnificada AFIP-DGI no compareció pese a estar debidamente notificada, sin perjuicio de presentarse por escrito.

II.- Que, de acuerdo al requerimiento de elevación a juicio de fecha 14 de agosto de 2020, se calificaron los hechos imputados a la firma JANITOR SRL y al nombrado Emilio Walter BIANCHETTI en el art. 1 de la ley 24.769, en relación a la presunta evasión del pago del Impuesto al Valor Agregado correspondiente a los ejercicios fiscales 2013, 2014 y 2015.

III.- Que los Sres. Defensores solicitaron la declaración de inconstitucionalidad del art. 19 de la ley 26.735 (art. 76 bis in fine del CP) en cuanto prohíbe el beneficio de la suspensión de juicio a prueba para los imputados por delitos establecidos en la ley 24.769. La Sra. Auxiliar Fiscal General de Juicio rechazó tal planteo, no dando por consiguiente conformidad para los beneficios solicitados.

IV.- Que la primera cuestión a tratar es si la oposición fiscal, en este caso en particular, vincula al Tribunal en orden a la



improcedencia del beneficio de la suspensión del juicio a prueba (art. 69 del CPP y doctrina plenaria de la entonces Cámara Nacional de Casación Penal (CNCP) in re “Kosuta Teresa” del 17/08/999. De responderse de manera afirmativa, resultará inoficioso considerar el resto de los requisitos del art. 76 bis del CP.

V.- Que en la citada audiencia, como se dijera, la discusión estuvo dada en la constitucionalidad del art. 76 bis in fine del CP vigente a la fecha de los hechos. Mientras la defensa estimó que tal norma era inconstitucional, la Sra. Auxiliar Fiscal entendió por el contrario que la misma no lo era. Por lo demás, la Sra. Defensora enfatizó la disparidad de criterios entre las distintas fiscalías al respecto, de manera que la suerte del justiciable quedaba sujeta a una cuestión de azar en orden a la fiscalía que le tocara intervenir, lo cual afectaba el derecho a la igualdad ante la ley (art. 18 de la CN) . Ello, sin perjuicio de sostener que también se lesionaba esa igualdad respecto a la procedencia del beneficio en orden a delitos de penas mayores, con citas de los legisladores intervinientes en los debates de la ley n° 26.735.

VI.- Que un fallo plenario dictado por la CFCP es obligatorio para el Tribunal, sin perjuicio de dejarse a salvo el criterio personal (art. 14 2do. párrafo de la ley n° 24.050). Su doctrina sólo podrá ser dejada sin efecto por otra decisión en pleno (norma citada in fine) o, como se verá, por un pronunciamiento posterior de un Tribunal Superior o por una modificación de las circunstancias que lo motivaron.

VII.- Que el citado plenario “Kosuta” tuvo por interrogantes distintas cuestiones relacionadas con el art. 76 bis del CP introducido por la ley n° 24.316/94, es decir en su texto original. Entre ellas, la CNCP se pronunció respecto al ámbito de aplicación de la norma, la procedencia del instituto respecto a aquellos delitos reprimidos con penas de inhabilitación, el carácter vinculante de la oposición del Ministerio Público Fiscal y la capacidad del querellante para recurrir. Todo ello, se repite, a la luz del art. 76 bis del CP en su redacción original.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

VIII.- Que es sabido que la primera de las cuestiones tratadas en el citado plenario -delitos a los que se aplicaba la citada norma- llegó posteriormente a conocimiento de la Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) en el caso “Acosta Alejandro Esteban (Fallos 331:858), fallo en el que se consagró la doctrina contraria a lo decidido por la CNCP. De hecho, entonces, quedó naturalmente sin efecto lo resuelto respecto al primer interrogante tratado en el citado plenario. No hubo posteriormente una modificación del mismo, ajustándolo a la doctrina sentada por la CSJN. Como quiera que haya sido, el criterio de la CNCP respecto al ámbito de aplicación del art.76 bis del CP consagrado en el fallo “Kosuta” quedó naturalmente sin efecto. Sin embargo, quedaron en pie las otras cuestiones allí tratadas (la improcedencia del beneficio respecto a aquellos delitos reprimidos con penas de inhabilitación, el carácter vinculante de la oposición del MPF, la capacidad de recurrir del querellante). Todo ello referido a la redacción original del art. 76 bis del CP. Una situación similar respecto a decisiones plenarias que luego fueron controvertidas por la CSJN se dio en orden a lo resuelto por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico (CNAPE) en el fallo plenario “Ortega Susana Nélica” respecto al Juez competente para conocer respecto a los delitos del art. 302 del CP. La CSJN posteriormente consagró una doctrina contraria respecto al inc. 4° de tal norma y la CNAPE modificó entonces el citado plenario conforme lo resuelto por el Alto Tribunal (fallo “Fiumana Hugo Washington” del 27/03/79). En otro ejemplo de modificación de la doctrina de un plenario por criterio posterior en contrario de la CSJN debe citarse el caso “Agüero Irma Delia” de la CFCEP del 12/06/02 y la doctrina del Alto Tribunal in re “Olariaga Marcelo Andrés del 26 /06/07.

IX.- Se ha dicho ya que la ley n° 26.735/11 agregó un párrafo a la citada norma prohibiendo la suspensión del juicio a prueba respecto a los delitos de las leyes nros. 22.415 y 24.769 y sus respectivas modificaciones.

X.- También fue ya referido que el citado fallo “Kosuta” trató lo vinculante de la oposición del MPF en relación al art. 76 bis del CP en su redacción original. Basta ver en ese sentido las



consideraciones efectuadas al ser tratado el interrogante Tercero del acuerdo tanto por el voto de los Dres. Casanovas y Tragant como el voto de la mayoría encabezada por el Dr. Riggi como por el voto individual del Dr. David.

XI.- Si ello es objetivamente así, es del caso preguntarse si el carácter vinculante de la oposición del MPF según el citado plenario se mantiene cuando la causal de tal oposición no se la relaciona con la posibilidad de dejar en suspenso una eventual pena de prisión (art. 76 bis 4to. párrafo del CP) sino con una modificación posterior a la norma que naturalmente no fue tratada en el citado plenario.

XII.- La respuesta negativa se impone pues no es posible restringir el derecho al beneficio con una interpretación extensiva in malam partem a una situación posterior no considerada en el plenario “Kosuta”. Las restricciones a un derecho reconocido sólo pueden reconocer una fuente legal. El fallo “Kosuta” sólo consagró el carácter vinculante de la oposición del MPF respecto al art. 76 bis del CP en su redacción original con expresa relación al supuesto de su cuarto párrafo.

XIII.- De otra parte, como lo reconociera el Tribunal Europeo de Derechos Humanos respecto al Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades Fundamentales en los casos “Airey c. Irlanda” del 09/10/79 y “Tyrer c. Reino Unido” de 25/04/78, la Constitución Nacional también es un instrumento vivo que aspira a mantener su vigencia y efectividad a través de los cambios sociales de todo tipo. En otras palabras, ello significa que se deben interpretar las leyes en forma evolutiva, en el sentido de proporcionar una mayor protección a los derechos reconocidos, de manera de otorgarle una tutela efectiva. Ello se ve claro en otra de las doctrinas consagradas en el citado fallo “Kosuta”, cual es la prohibición del beneficio respecto a aquellos delitos reprimidos con penas de inhabilitación (art. 76 bis in fine del CP en su versión original). La propia CSJN y los Tribunales inferiores sostuvieron que tal prohibición no procede cuando sea posible establecer reglas conductas tendientes a compensar las incompetencias del caso (CSJN caso “Delillo Karina Claudia” del 03/08/10 op. min. y doctrina de este Tribunal in rebus





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

“Carbia Alberto Carlos” del 12/11/21, Benítez Gabriel Ignacio” del 07/06/22 y “Campitelli Leonardo Martín” del 09/09/22 entre otros fallos). En el mismo sentido de mayor protección al derecho de que se trata, también la Procuración General hubo dictado la Resolución General n° 24/2000 que faculta a los fiscales a no aplicar la prohibición referida cuando sean ofrecidas las autoinhabilitaciones respectivas.

XIV.- Todo lo expuesto constituye, según se entiende, argumento suficiente para no estimar vinculante en el caso la oposición de la Sra. Auxiliar Fiscal respecto a la procedencia del beneficio solicitado con base en el citado plenario. Debe remarcarse en ese aspecto que la disconformidad del caso sólo se basó en la restricción del art. 76 bis in fine del CP, restricción que se estimó constitucional. Va de suyo que el MPF sigue siendo titular de la acción penal (art. 5 del CPP) sólo que, en caso de oponerse a la procedencia de la suspensión del juicio a prueba por razones distintas a las contempladas en el art. 76 bis 4to. párrafo del CP, tal criterio no resultará vinculante para el Tribunal, el cual se encontrará legítimamente habilitado procesalmente para resolver lo que entienda corresponder.

XV.- El Tribunal, por doctrina consolidada, trató repetidamente el ámbito de aplicación de la limitación de la parte final del citado artículo considerando en primer término si era posible una interpretación del mismo que otorgara razonabilidad con el derecho en juego, sin necesidad de la extrema declaración de su inconstitucionalidad. Como lo tiene reiteradamente establecido la CSJN tal declaración es una cuestión de suma gravedad institucional, pues las leyes dictadas de acuerdo a los mecanismos previstos por la CN gozan de una presunción de legitimidad que opera plenamente y sólo debe ser reservada cuando la lesión o amenaza al respectivo derecho se muestre manifiesta, clara e indudable y cuando dicha norma no admita una interpretación que se compadezca con los principios y garantías de la Constitución Nacional (Fallos 310:500, 1799 y 315:1958 entre otros).



XVI.- La suspensión del juicio a prueba es un derecho a favor del imputado que reconoce no sólo rango legal como lo afirmara la CSJN en el antecedente de Fallos 331:858 sino también constitucional por su directa vinculación con el derecho de defensa en juicio (art. 18 de la CN). Como se ha dicho, sólo habrá de tratarse su constitucionalidad cuando no sea posible una interpretación de la norma que respete el derecho presuntamente afectado.

XVII.- En ese sentido, el legislador de 1994 ha limitado su ejercicio al establecer a qué clase de delitos de aplica, a la actuación de las partes, al plazo de suspensión, a sus interrupciones y consecuencias, a los límites respecto a aquellos delitos reprimidos con penas de multa e inhabilitación, a la participación en tales delitos de un funcionario público (arts. 76 bis párrafos 1° a 9 y 76 ter del CP). En otras palabras, ha ejercido su discrecionalidad dentro de un marco de razonabilidad aceptado constitucionalmente.

XVIII.- El art. 19 de la ley n° 26.735 agregó un nuevo párrafo al citado art. 76 bis disponiendo que la suspensión del juicio a prueba no resultaba aplicable a los delitos de las leyes nros. 22.415 y 24.769, es decir, estableció una nueva restricción al goce del derecho. La esforzada defensa, como se dijera, sostuvo que tal limitación, en el presente caso, era inconstitucional por afectar el principio de igualdad ante la ley (art. 16 de la CN).

XIX.- En tales condiciones, es dable analizar si esa nueva restricción es razonable constitucionalmente o si la propia norma admite una interpretación tal que respete el derecho presuntamente afectado, sin que sea necesario la declaración de su inconstitucionalidad.

XX.- El Tribunal ha tenido reiteradas ocasiones de tratar el proceso formativo que culminó con la sanción de la ley n° 26.735 en lo relativo a la modificación del citado art. 76 bis último párrafo del CP, tendiente a indagar y respetar el espíritu del legislador (por todos, los casos “Camelli Luis Alberto” fallado el 04/11/16, reg. 268-R y “Velasco Juan Diego” del 19/12/17). Tal análisis abarcó la propia letra de la norma, los respectivos debates parlamentarios y las consecuencias de su aplicación, pautas de interpretación de la ley consagradas por la CSJN (Fallos 322:752, 319:1311 y 323:1406 y





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

1460 entre otros). Descartada en ese sentido la letra del citado art. 76 bis último párrafo del CP por la inexistencia de datos relevantes, la interpretación posterior consideró el proyecto del Poder Ejecutivo y su tratamiento en las dos cámaras legislativas. De su análisis integral fue dado concluir que la prohibición de la suspensión del juicio a prueba para delitos de las leyes nros. 22.415 y 24.769 estuvo fundamentada en primer lugar en una suerte de prevención especial negativa (“a fin de acrecentar el riesgo penal” rezaba el mensaje del Poder Ejecutivo que acompañó el citado proyecto de ley, criterio que recogieron a pie juntillas las respectivas comisiones de Legislación Penal y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara baja y al que adhirió con entusiasta complacencia el diputado ALBRIEU quien llevara la palabra en el respectivo debate). Tal criterio luego fue precisado al aludirse expresamente al grave perjuicio económico que causaban tales conductas en el erario nacional (“...personas o empresas que evaden recursos fiscales por montos importantes y que están privando al Estado Nacional de recursos que permitirían resolver muchísimos problemas...”; intervención del diputado HELLER). La precisión de este legislador resulta reveladora del fin de la prohibición pues su intervención fue como respuesta a los dichos de la diputada Natalia GAMBARO quien había sostenido que la suspensión del juicio a prueba “...apunta(ba) a los pequeños contribuyentes y a las pymes, es decir, aquellos casos en que la evasión se registre por imposibilidad de pago y no por una maniobra muy elaborada...”. En su tratamiento en Senadores, se mantuvo en general, por la bancada mayoritaria, el criterio del proyecto aprobado por Diputados, sin nuevamente atenderse a las críticas constitucionales de la minoría (ver en ese sentido intervenciones de los senadores GUASTAVINO y SANZ). De esas mismas discusiones, es dado advertir objetivamente que tanto los delitos tributarios como los delitos aduaneros fueron considerados por el legislador como conductas que afectaban gravemente la renta pública y la imposibilidad de beneficiarse con la suspensión del juicio a prueba tendía precisamente a desalentar ese tipo de prácticas. Ello resulta en el caso de suma importancia para determinar cuál fue es el espíritu y fin del legislador pues, luego de considerarse los delitos de las leyes nros. 22.415 y 24.769 desde el punto de vista exclusivo de



una lesión patrimonial a las arcas fiscales, también precisó el alcance de ese perjuicio: debía ser importante, es decir, no cualquier daño sino aquel que tuviera una entidad significativa. Si ello es objetivamente así, el espíritu que guió al legislador en la citada prohibición, partiendo del alcance preventivo del proyecto del PE y la precisión hecha en los debates posteriores, estuvo circunscripto a desalentar aquellas conductas de las leyes nros. 22.415 y 24.769 que poseyeran una entidad económica importante de perjuicio hacia las arcas fiscales. Tal afirmación, consecuentemente, marca un ámbito preciso de la prohibición: la misma sólo será aplicable a aquellas conductas de las leyes nros. 22.415 y 24.769 que importen graves o importantes perjuicios económicos para el erario fiscal. Como contrapartida de ello, la restricción no abarcará aquellas otras conductas de dichas leyes que no posean tal entidad de perjuicio. Por lo demás, ello es fácil de aprehender en los tipos principales de la ley n° 24.479 atento las reiteradas referencias a los montos del perjuicio (véase el respecto vgr. la intervención de la diputada BULLRICH en el respectivo debate). Con mayor razón entonces, en cada asunto en particular, partiendo de ese ámbito acotado de aplicación se habrá de evaluar la procedencia o no de la prohibición del art. 76 bis último párrafo del CP.

XXI.- Que se ha dicho ya que en el análisis de una ley también, conjuntamente con su letra expresa y los debates parlamentarios, deben verificarse también las consecuencias que genera su aplicación, pues ellas constituyen uno de los índices más seguros para verificar su razonabilidad y su coherencia con el sistema en el que está engarzada la norma. En ese sentido, tal análisis ratifica plenamente lo dicho anteriormente pues tanto en la ley n° 22.415 como en la ley n° 24.769 existen conductas que no poseen relevancia grave en orden al perjuicio económico al erario fiscal y por ende quedarían fuera de la prohibición. Así, tomando los valores de la redacción original de la citada ley penal tributaria, un supuesto de apropiación indebida de tributos por montos no ingresados de \$ 43.000 (art. 6 de la ley n° 24.769); una evasión simple respecto a los recursos de la seguridad social por un monto de \$81.000 (art. 7° íd.) o una hipótesis de apropiación indebida de tales recursos u omisión de





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

depósitos por el agente de retención o percepción por montos de \$ 21.000 (art. 9 ibíd.). También conductas de contrabando (ley n° 22.415) cuyas mercaderías posean un valor en plaza de \$ 120.000 o en el caso de tabacos y derivados un valor de \$35.000 o asuntos en los cuales el valor en plaza de la mercadería sea inferior a \$ 100.000 pero igual se configura delito (arts. 947 y 949 del CA) o, en el supuesto más extremo, un simple encubrimiento de contrabando carente de toda significación económica (art. 874 del mismo texto legal). En tales hipótesis se habrá de convenir que el perjuicio económico a las arcas fiscales no resulta particularmente significativo cuando no inexistente.

XXII.- Que el análisis expuesto importa interpretar la citada prohibición del art. 76 bis último párrafo del CP asignándole un preciso ámbito de aplicación cuidando que la inteligencia dada no pueda llevar a la pérdida del derecho de que se trata (CSJN Fallos 331 :858 y sus citas). Así entonces, tal restricción sólo abarcará aquellas conductas de las leyes nros. 22.415 y 24.769 que posean un perjuicio económico grave o importante para el Estado, perjuicio que sólo podrá ser determinado de acuerdo a las circunstancias del caso. La aplicación de la referida norma a todos los supuestos de las citadas leyes sin distinción alguna importa alterar el espíritu que guió al legislador al establecer la prohibición y, a su partir, también avalar conscientemente una lesión objetiva al ejercicio de tal derecho sobre la base de un tratamiento desigual ante iguales situaciones (art. 16 de la CN; ver intervenciones de los diputados GIL LAVEDRA y BULLRICH y del senador SANZ en los citados debates parlamentarios y doctrina de la CSJN de Fallos 321:3630 y sus citas).

XXIII.- Que, en otras palabras, sólo será inconstitucional la interpretación del art. 76 bis último párrafo del CP que estime que la prohibición del caso abarca todos los supuestos de las conductas de las leyes nros. 22.415 y 24.769 sin distinción alguna. Como lo ha resuelto la CSJN, una ley puede ser atacada de inconstitucional no sólo por su contenido sino por la interpretación dada por los jueces en



tanto resulte reñida con las disposiciones constitucionales en juego (Fallos 313:209, ver dictamen del Procurador General el que hizo suyo el Alto Tribunal).

XXIV.- Como lo sostuviera el Alto Tribunal, hacer justicia, como misión específica de los jueces, no importa otra cosa que la recta determinación de lo justo in concreto y ello sólo se puede lograr ejerciendo la virtud de la prudencia animada en la realización efectiva del derecho en las situaciones reales que se le presenten, lo que exige conjugar los principios enunciados en la ley con los elementos fácticos del caso, cuyo consciente desconocimiento no se compadece con la misión de administrar justicia (Fallos 302:1611). En palabras del siempre recordado maestro Bidart Campos, la constitucionalidad de una norma no se alcanza a saber con el manejo de estándares y clisés formulistas, sino con la búsqueda minuciosa de lo “objetivamente justo para el caso”. Cada caso necesita la lupa judicial concreta y, si hay muchos recovecos que ella debe examinar, los jueces no deben solamente verificar “abstractamente” las normas y desentenderse de los “efectos” que su aplicación a cada caso produce pues para un caso una prudente interpretación puede ser constitucional y para otro no (“Reflexiones constitucionales sobre la incriminación de la evasión fiscal y las infracciones formales”, El Derecho, T. 154, p.853). En ese sentido, debe siempre tenerse presente a esos efectos la finalidad del instituto en cuestión –evitar las penas de prisión cortas y el riesgo de la estigmatización de una condena-, a lo cual cabe agregar el principio pro homine aludido por la propia CSJN en el antecedente de Fallos 331:858, argumentos que permiten desechar también cualquier falta de previsión en el legislador. El análisis global conjunto de todas esas consideraciones debe dar respuesta razonable al alcance de la limitación de la norma pues una aplicación automática de la misma vacía de contenido los fines del instituto, presupone la inconsecuencia del legislador y lesiona todo sentido de justicia.

XXV.- De allí entonces que, a los efectos de verificar si en este caso es de aplicación la limitación del derecho a gozar de la suspensión del juicio a prueba respecto a los hechos requeridos, es





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

menester considerar el grave perjuicio económico a las arcas del Estado derivado de los mismos.

XXVI.- En ese sentido, los impuestos omitidos en relación a las presuntas evasiones del pago del Impuesto al Valor Agregado correspondientes a los ejercicios 2013, 2014 y 2015 fueron respectivamente \$ 2.260.452,83, \$ 2.337.334,06 y \$ 1.557.360,92. Es decir, sumas importantes a la época de los hechos pero que objetivamente no llegan al grado de suma gravedad o grave perjuicio del que se nutre la norma para aplicar la restricción del derecho respectivo según lo sostenido por el legislador. En ese sentido, como dato meramente objetivo para considerar un estándar mínimo para apreciar esa gravedad calificada, sea dado recordar que el valor máximo de la evasión agravada del art. 2 inc. “a” de la ley n° 24.769 versión de la ley n° 26.735 era de \$ 4.000.000, es decir, sensiblemente menor a los montos de los impuestos aludidos. Por lo tanto, de acuerdo a la interpretación referida, no resulta de aplicación al caso la limitación del art. 76 bis in fine del CP y por ello mismo se vuelve inoficioso todo pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad de tal norma.

XXVII.- Ello autoriza al Tribunal a tratar las solicitudes del caso de acuerdo a las pautas generales de la citada norma. Así,

a) Posibilidad, en caso de condena, de una pena de prisión en suspenso: ello es factible, de acuerdo a la falta de antecedentes del imputado, la calificación legal de los hechos (art. 9 de la ley n° 24.769), su integración social y el tiempo transcurrido a hoy desde los mismos (art. 26 del CP). Los hechos del caso son de los años 2013, 2014 y 2015.

b) Reparación del daño en la medida de lo posible: Se ha ofrecido pesos un millón quinientos mil (\$ 1.500.000) pagaderos en tres (3) cuotas, en forma conjunta con la persona física y la jurídica, reparación que resulta razonable en función de la actual capacidad económica de BIANCHETTI y la situación de la empresa (ver audiencia citada). La oposición de la parte damnificada a este respecto le deja abierta la vía civil correspondiente.



c) Reglas de conducta: En relación al imputado, además de fijar domicilio y someterse al control de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal, se le impondrá donaciones de dinero y de alimentos a distintas instituciones de bien público.

d) Lapso del beneficio: Visto el extenso lapso de los hechos a hoy y la integración social del imputado, el mismo será de UN (1) AÑO.

XXVIII.- En orden al beneficio solicitado a la persona jurídica “Janitor S.R.L” el mismo también será concedido a partir de la procedencia del mismo respecto al nombrado BIANCHETTI. Si bien el art. 76 bis del CP fue concebido para ser aplicado a una persona física, nada obsta a que sea aplicado también a una persona jurídica, a falta de limitación al respecto. En ese sentido, se vuelve a reiterar que la restricción a un derecho reconocido sólo puede poseer como fuente una norma legal (vgr. lo dispuesto expresamente por el art. 59 apartado 8° 2do. párrafo del Anteproyecto del Código Penal de 2019). Va de suyo que las respectivas reglas de conductas deben ser adecuadas a la propia naturaleza del ente jurídico. En ese sentido, la reparación del daño ofrecida también se considera razonable. El lapso respectivo también será de UN (1) AÑO).

Por ello, oídas las partes,

SE RESUELVE:

I.- DECLARAR INOFICIOSO todo pronunciamiento sobre la inconstitucionalidad del art. 76 bis in fine del CP.

II.- CONCEDER la suspensión del juicio a prueba por el término de **UN (1) AÑO** al imputado **Emilio Walter BIANCHETTI**, con sujeción a las siguientes reglas de conductas:

a) FIJAR domicilio y someterse a la supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal;

b) DONAR la suma de pesos setecientos cincuenta mil (\$ 750.000) en tres (3) cuotas mensuales de pesos doscientos cincuenta mil (\$ 250.000) a la *Escuela Rural Matilde Dorgambide de Burany, Costa Icaño, Santiago del Estero* -contacto: Directora Susana 03844-15-529-502; matildedeburany442@gmail.com-.





Poder Judicial de la Nación

TRIBUNAL ORAL PENAL ECONOMICO 2

c) **DONAR** mensualmente a la institución “*Amigos en el camino*” (provisión de viandas ofrecidas semanalmente a más de 1000 personas en situación de calle) los siguientes alimentos: latas de lentejas (4), latas de puré de tomates (5), paquetes de arroz (5), lata de arvejas (5), botellas de aceite (3), paquetes de fideos (5), paquetes de café (5) y jugos en polvo (5) -contacto: 11-3910-2998; amigosenelcamino@gmail.com-.

II.- DECLARAR RAZONABLE la reparación económica de pesos un millón quinientos mil (\$ 1.500.000) ofrecida en forma conjunta y **ESTAR** en ese sentido a la regla de conducta respectiva.

III.- CONCEDER la suspensión del juicio a prueba por el término de **UN (1) AÑO** a la persona jurídica “**JANITOR S.R.L.**” con sujeción a las siguientes reglas de conducta:

a) **FIJAR** domicilio y someterse a la supervisión de la Dirección de Control y Asistencia de Ejecución Penal.

b) **DONAR** la suma de pesos setecientos cincuenta mil (\$ 750.000) en tres (3) cuotas mensuales de pesos doscientos cincuenta mil (\$ 250.000) a la institución “*Hospital San Camilo*” -contacto: info.hospitalsancamilo@gmail.com.

c) **DONAR** mensualmente a la “*Asociación Civil A todo corazón*” los siguientes alimentos: paquetes de arroz (5), paquetes de fideos (5), botellas de aceite (3), latas de tomate (8), leche en polvo (3), paquetes de polenta (5) -contacto: Sra. Amanda TE. 11-6017-9013; a-todocorazon@yahoo.com.ar

IV.- DECLARAR RAZONABLE la reparación económica de pesos un millón quinientos mil \$ 1.500.000 en forma conjunta ofrecida y **ESTAR** en ese sentido a la regla de conducta respectiva.

V.- TENER PRESENTES las reservas efectuadas por las partes.

Regístrese y notifíquese.- Extráigase copia a fin de ser agregado al incidente correspondiente a la firma Janitor SRL. Firme que sea, cúmplase.-



